



PODER JUDICIAL
del Estado
de Baja California

COMITÉ TÉCNICO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

ACTA RELATIVA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 13/17

En Mexicali, Baja California, siendo las trece horas del día once de mayo de dos mil diecisiete, se reunieron en la sala de sesiones del Consejo de la Judicatura del Estado, los integrantes del Comité Técnico de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Magistrado Presidente Jorge Armando Vásquez, Magistrado Félix Herrera Esquivel, Consejero de la Judicatura, Licenciado Gerardo Brizuela Gaytán, Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura, Licenciado César Morales López, Contralora del Poder Judicial, Licenciada Norma Olga Angélica Alcalá Pescador y la Directora de la Unidad de Transparencia, Maestra en Derecho Elsa Amalia Kuljacha Lerma, Secretaria Ejecutiva del Comité, para celebrar la sesión extraordinaria 13/2017 del presente año.

La Secretaria del Comité da cuenta con el quórum de asistencia al Presidente, quien declara su existencia, por lo cual se inicia esta sesión. Acto continuo, sometió a sus integrantes el orden del día en los siguientes términos:

ORDEN DEL DÍA

I. Aprobación del orden del día.

Por unanimidad se aprobó en sus términos.

II. Asuntos a tratar:

ÚNICO. Procedimiento de clasificación de la información 06/2017, derivado de la solicitud presentada mediante el Sistema de Solicitudes Electrónicas del Poder Judicial, registrada el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, bajo el folio número 0111/17.

Visto el proyecto de resolución presentado por la Secretaria del Comité, se puso a discusión el asunto y con las facultades que se le confieren al Comité, en las fracciones I y II del artículo 54, de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 8 y 11 fracción XIII, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Baja California, **se aprobó por unanimidad de votos por sus propios y legales fundamentos, autorizando la clasificación de la información de carácter confidencial plasmada en la versión pública digitalizada del expediente número 1409/2011, radicado ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, CONSIDERANDO QUE:**

a) Mediante la solicitud de referencia se pide: *"(...) COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DIGITAL DE TODO LO ACTUADO, PROMOVIDO Y ACORDADO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1409/11, QUE SE LLEVA A CABO EN EL JUZGADO SEGUNDO CIVIL, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C."*

b) Por oficio número 1495 de 21 de abril del año en curso, el Titular del Juzgado de referencia solicitó la ampliación del plazo para dar

respuesta a la solicitud 0111/17, misma que los integrantes del Comité Técnico acordaron aprobar en la sesión extraordinaria 08/17 de fecha 26 de abril pasado.

c) Mediante oficio 1740, de fecha 4 de mayo del año que transcurre, el Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, da contestación a la solicitud mencionada, remitiendo en versión pública digitalizada la información peticionada, constante en mil noventa y ocho fojas útiles del expediente 1409/2011, en el cual se suprimieron los datos que fueron clasificados como confidenciales, cubriendo el espacio correspondiente mediante la utilización de una línea negra.

d) Recibida la versión pública digitalizada en la Unidad de Transparencia y verificada por ésta, que se hubiesen suprimido los datos personales de las constancias de acuerdo a la normatividad aplicable, se turnó el documento y proyecto de resolución, para el análisis del Comité de Transparencia, el que, atendiendo al artículo 141 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, por tratarse de una solicitud en la que se ve involucrada información confidencial, **procede a determinar si los datos suprimidos en el documento que se analiza, son o no confidenciales, aplicando la prueba de daño** a que se refiere el artículo 109 de la Ley local de transparencia y acceso a la información pública, tomando en cuenta que:



1) En principio, toda información generada, administrada, adquirida o en posesión del Poder Judicial, por virtud del ejercicio de sus competencias, funciones y atribuciones, es pública, con las salvedades establecidas en la propia ley. La elaboración de versiones públicas, de conformidad con los Lineamientos que para tales efectos se han autorizado y se encuentran publicados en el Portal de Obligaciones de Transparencia, permite la consulta pública de todo documento o resolución emitida, con excepción de la información considerada confidencial o reservada.

Para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes se requiere como acto previo, emitir un criterio que clasifique la información como reservada o confidencial. Al respecto, el artículo 106 de la Ley en cita, la clasificación es un proceso mediante el cual el sujeto obligado determina, que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad.

Por otro lado el artículo 139 de la Ley estatal multicitada, dispone que:
“En caso de que la clasificación se hiciera con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información, se deberán exponer los motivos que la justifiquen y aplicar una prueba de daño (...).

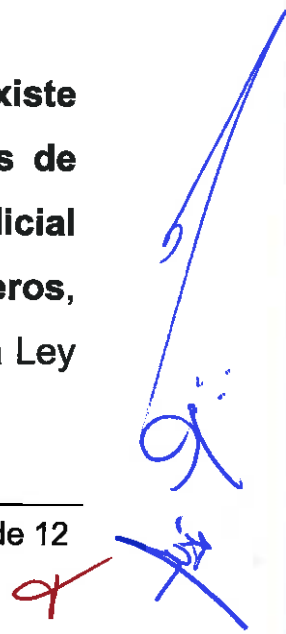
Esto implica precisar la normatividad que expresamente le otorga el carácter de confidencial a la información omitida, y determinar si con su difusión se causaría un serio perjuicio al interés o

intereses públicos tutelados, es decir, la existencia de una expectativa razonable de daño presente, probable o específico, a lo que la doctrina ha denominado la prueba del daño.

2) Así encontramos para el acto de clasificación, como elementos objetivos los siguientes:

2.1) La versión pública de mérito, fue elaborada en observancia al marco normativo que rige en la materia, esto es, a lo establecido en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4 fracción VI, XII, XV, 106, 107 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 6 fracción III y VI, 17, 18, 30, 35, 37, 40, 43 y relativos del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado y 1, 2 fracción XIV, 4, 9, 10, 13, 14, 16, 20, último párrafo, 21 y demás relativos de los Lineamientos para la elaboración de versiones públicas de documentos y resoluciones que tiene bajo su resguardo el Poder Judicial del Estado de Baja California.



2.2) Del propio documento en estudio, se desprende que no existe consentimiento expreso de los sujetos particulares titulares de los datos personales, que intervienen en el proceso judicial enunciado, para que éstos puedan ser comunicados a terceros, como se dispone en el diverso numeral 140 del Reglamento de la Ley local de la materia.



2.3) En virtud de lo anterior y como consecuencia de la aplicación normativa reseñada, se suprimió toda información de carácter confidencial de los particulares que intervienen en el proceso jurisdiccional de mérito, lo cual se justifica, considerando que mediante la aplicación de la prueba de daño, es innegable que la divulgación de estos datos representa un perjuicio real y significativo para sus titulares y del interés público de tutelar la vida privada y la intimidad de los particulares, ya que se trata de información que no es de interés general; esto es, los datos omitidos se refieren a: nombres de las partes, obligados solidarios, escrituras, firmas, abogados, apoderados, autorizados para imponerse de los autos, acreedores registrales, testigos, domicilios particulares, legales y convencionales, identificaciones, ubicación de bienes inmuebles, fechas, estados de cuenta, cantidades, avalúos y deslindes que tienen que ver con el patrimonio de las personas, **información acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que establece en su Artículo 4, fracción XII, que se entenderá por información confidencial:** *La información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; la que se refiere al secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho de entregarla con ese carácter; por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos*

casos que así lo contemple la Ley General o la presente Ley”, aseveración que se robustece en el diverso precepto normativo 136 del **Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California**, que a la letra reza: **“Se consideran datos personales, de manera enunciativa más no limitativa: la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, tales como el nombre, número telefónico, edad, sexo, registro federal de contribuyentes, clave única de registro de población, estado civil, domicilio, dirección de correo electrónico, origen racial o étnico, lugar y fecha de nacimiento, lugar de origen y nacionalidad, ideología, creencias o convicción religiosa, filosófica, política o de otro género; los referidos a las características físicas, morales o emocionales, preferencias sexuales, vida afectiva o familiar, o cualquier otro referente al estado de salud físico o mental, datos laborales, idioma o lengua, escolaridad, patrimonio, títulos, certificados, cédula profesional, saldos bancarios, estados de cuenta, números de cuenta, bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, buró de crédito, seguros, afores, fianzas, tarjetas de crédito o de débito, contraseñas, huellas dactilares, firma autógrafa y electrónica, códigos de seguridad, etcétera.**

Por otro lado, existe **la obligación de los sujetos obligados de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial** dispuesta por la Ley estatal de la materia, en el artículo 16, fracción VI, y los diversos numerales 121 y 139 del Reglamento de



dicha Ley, que establecen que **en caso de que la clasificación se hiciera con motivo de la recepción de una solicitud de acceso a la información, se deberán exponer los motivos que la justifiquen y aplicar una prueba de daño**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley estatal, la Ley General de Transparencia, el Reglamento de la Ley local, los Lineamientos Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia y demás disposiciones aplicables, resulta pertinente citar el artículo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que indica que se entenderá por *“Prueba de Daño: la argumentación fundada y motivada que deben realizar los sujetos obligados tendiente a acreditar que la divulgación de la información lesiona el interés jurídicamente protegido por la normativa aplicable y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla”*.

Así las cosas y **dada la obligación de demostrar de manera fundada y motivada, que la divulgación de información lesiona el bien jurídico tutelado y que el daño que puede producirse con la publicidad de la información considerada confidencial, como en el caso que nos ocupa, es mayor que el interés de conocerla, se determina que al tratarse de datos personales que constituyen información confidencial protegida por la Ley y no se cuenta con la autorización de los titulares, para su entrega o divulgación, por**

tratarse de información concerniente a una persona física o jurídica identificada o identificable, debe clasificarse la misma como confidencial y restringirse su acceso.

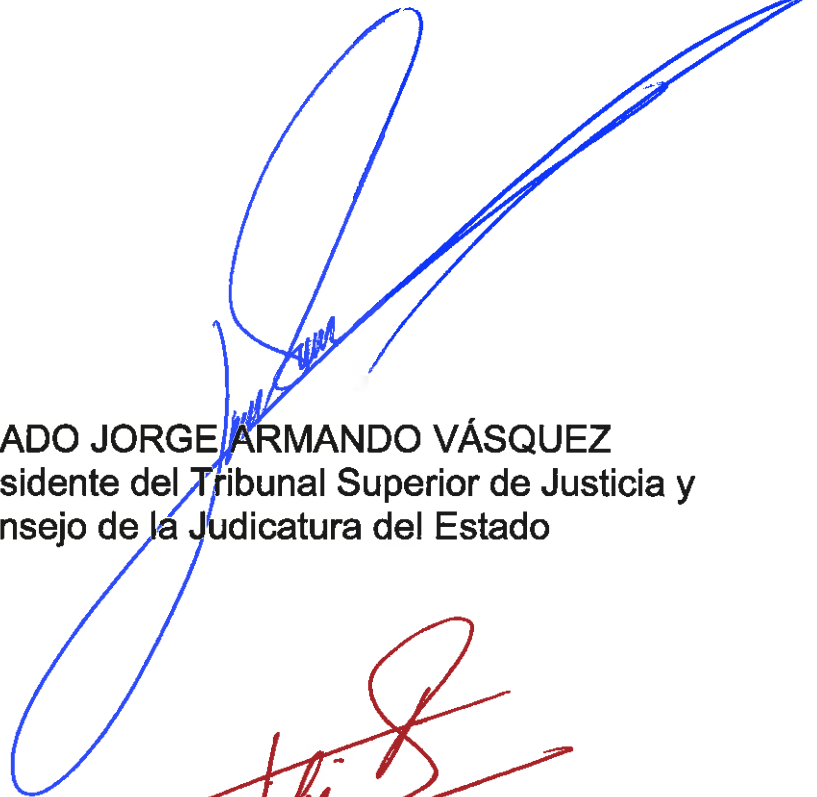
Efectivamente, con la aplicación de la prueba del daño, el sujeto obligado debe justificar conforme al artículo 109 de la Ley estatal de la materia que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o de la seguridad nacional. En este apartado **cabe decir que liberar la información de los sujetos privados que intervinieron en el proceso cuya versión pública fue solicitada, representa un riesgo real de injerencia de toda índole en sus vidas privadas, no autorizada, de ahí que no pueda liberarse la información, privilegiando el derecho a la intimidad de los particulares;** II. El riesgo o perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. Así, del análisis del punto anterior, se advierte que **el daño que se pudiese causar a los particulares al divulgar sus datos personales, supera el interés público de que se conozcan, pues inclusive; no se puede suponer ningún interés público de liberarse los mismos, por lo que la clasificación de confidencialidad debe persistir. Máxime, que no se cuenta con el consentimiento de los particulares para la liberación de sus datos;** III. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. En el caso que nos ocupa, **la limitación al derecho de acceso a la información es proporcional a la protección de la intimidad de los terceros y es el único medio para evitar el perjuicio, pues frente al marco**

Handwritten signatures and a blue line on the right margin. There is a blue line that starts near the top right and curves downwards. Below it, there are several handwritten signatures in blue and red ink.

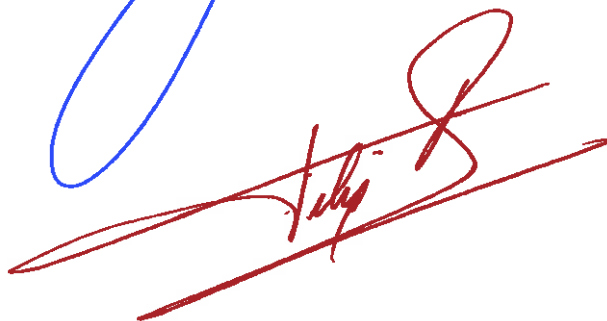
constitucional vigente, en términos del artículo 1^{ro.} de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad debe dar igual tratamiento en la protección de los derechos fundamentales, tanto del solicitante de la información como de los sujetos de quienes se deben proteger sus datos personales.

En consecuencia, los integrantes del Comité con voto, **ACUERDAN, aprobar la clasificación de confidencialidad de los datos personales de los sujetos que intervienen en el expediente 1409/2011, radicado en el Juzgado Segundo Civil de la Ciudad de Tijuana, Baja California, conforme al proyecto presentado, al no contar con el consentimiento expreso de los titulares de éstos, y por las razones y fundamentos expuestos con anterioridad.** Notifíquese y entréguese copia de esta acta al peticionario, por conducto de la Unidad de Transparencia, junto con la respuesta y versión pública de su interés. Igualmente, lo anterior deberá notificarse vía correo electrónico, por conducto de la Unidad de Transparencia, al Titular del Juzgado Segundo de lo Civil de Tijuana, Baja California, para su conocimiento y fines legales procedentes.

Sin otro asunto que tratar, se cierra esta sesión, siendo las catorce horas del día once de mayo de 2017.



MAGISTRADO JORGE ARMANDO VÁSQUEZ
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado



MAGISTRADO FÉLIX HERRERA ESQUIVEL
Adscrito a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia

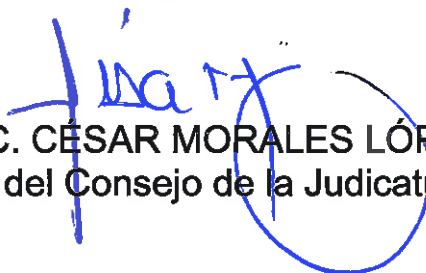


LIC. GERARDO BRIZUELA GAYTÁN
Consejero de la Judicatura del Estado





LIC. NORMA OLGA ANGÉLICA ALCALÁ PESCADOR
Contralora del Poder Judicial del Estado



LIC. CÉSAR MORALES LÓPEZ
Oficial Mayor del Consejo de la Judicatura del Estado



M.D. ELSA AMALIA KULJACHA LERMA
Secretaria Técnica del Comité